

1º.- Con fecha 6 de marzo de 2023, tuvo entrada en RENFE-Operadora, E.P.E., al amparo de la Ley 19/2013., de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, (en adelante, Ley de Transparencia), una solicitud de _____, que quedó registrada con el número 00001-00077576. A partir de dicha fecha, comenzó a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la citada ley para su resolución. Posteriormente, dicha resolución fue ampliada en un mes más, al amparo de lo establecido en el señalado artículo.

2º.- En virtud de la referida solicitud, se ha requerido acceso a la siguiente información:

“Asunto

Trenes de cercanías de la línea C1 y C10 de Madrid

Información que solicita

Queremos saber la cantidad de trenes que hay actualmente realizando el servicio de cercanías en las líneas C1 y C10 de Madrid así como la recopilación de las incidencias y tasas de puntualidad de los mismos en los últimos 6 meses.

*De motu proprio estoy sufriendo el deterioro de servicio de estas dos líneas en este último mes y a través de las redes sociales de @CercaniasMadrid hacen caso omiso para que nos indiquen si han quitado trenes para que los usuarios podamos hacernos a la idea y utilizar medios **alternativos**.”*

3º. - Una vez analizada la solicitud, y tras consultar a los servicios competentes de Renfe Viajeros, S.M.E., S.A., (en adelante, Renfe Viajeros), se acuerda conceder acceso parcial a la información requerida.

Al respecto, teniendo en cuenta que el artículo 22.3 de la ley de Transparencia **establece que** ‘Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella’, **se pone en** conocimiento del peticionario que en los Informes de Gestión que se publican junto con las cuentas anuales del Grupo Renfe se incluyen los índices de calidad y desempeño de Renfe Viajeros, así como diferentes parámetros de los servicios que presta dicha mercantil. En concreto, la información solicitada se encuentra

accesible a través del enlace que seguidamente se muestra, en la pestaña *'Relaciones con la sociedad, usuarios o partes interesadas y calidad de servicio'*, apartado **'Calidad de los Servicios'** subapartado **'Calidad del Servicio'**:

- <https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/gobierno-corporativo-y-transparencia/transparencia/indicadores>

Adicionalmente, también se publica información de interés sobre el desempeño de las empresas ferroviarias en los informes que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), y en el denominado *'Anuario del Ferrocarril'*, los cuales son accesibles a través de los siguientes enlaces:

- https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177040&menu=resultados&idp=1254735576820
- https://www.vialibre-ffe.com/anuario_ffe.asp

4º.- Sin perjuicio de la información proporcionada, en tanto que se requiere la elaboración de un informe sobre el número de trenes que actualmente realizan el servicio de las líneas C1 y C10, junto con su listado de incidencias y tasas de puntualidad durante los últimos seis meses, la solicitud incurriría un ejercicio anómalo del derecho de acceso que regula en el Capítulo III del Título I de la Ley de Transparencia, toda vez que no se constituye información que reúna las **características de 'información pública'**, a los efectos de lo establecidos en el artículo 13 de la citada Ley.

En efecto, no se solicitan 'contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones', sino la respuesta, lo que de ordinario implica elaborar un informe por los responsables de la explotación, a preguntas concretas sobre la organización y destino del material rodante empleado por Renfe Viajeros S.M.E., S.A., como datos específicos sobre incidencias y puntualidad del servicio de cercanías en la Comunidad de Madrid.

En este sentido, es preciso destacar que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) ha venido señalando que el derecho de acceso previsto en dicha ley no ampara la obtención de respuestas o la elaboración de

informes ad hoc fuera del ámbito de un procedimiento administrativo, especialmente si dichos informes o respuestas tienen que ser elaboradas expresamente para dar contestación a una concreta solicitud de acceso, como sucede en el presente caso. Puede traerse a colación, entre otras, la Resolución R/0276/2018.

No sería posible, por lo tanto, proporcionar una respuesta concreta a la pregunta sobre el parque material de Renfe Viajeros S.M.E., S.A., en tanto que no está asignado a una única provincia, comunidad autónoma o núcleo. Los trenes se van asignando a los núcleos según vayan surgiendo las necesidades de material, siendo habitual su movimiento en función de las necesidades del servicio, siempre con respeto al contrato de servicio público vigente.

En cuanto a las incidencias y puntualidad en la circulación, siendo el gestor de la circulación ferroviaria, la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, nos encontramos ante un concepto muy amplio, que abarca todo tipo de suceso imputable a la infraestructura, señalización, vehículos, causas ajenas al ferrocarril, etc. En cuanto la red ferroviaria no es de competencia de Renfe Viajeros, el operador no debería facilitar lo solicitado, debido a que podría ser entendido como que todas esas incidencias, de mayor o menor importancia, le son imputables. En realidad, la empresa soporta sus consecuencias, también cuando no tiene control alguno sobre sus causas y están fuera de su ámbito de responsabilidad. Por ello, este dato, que excede de su ámbito de responsabilidad, es susceptible de ser utilizado contra la empresa que lo facilite.

Consecuentemente, la información solicitada vendría afectada por el límite al derecho de acceso previsto en el artículo 14.1.h) de la ley de Transparencia, con base a los motivos que seguidamente se exponen y atendiendo a que la normativa de transparencia administrativa obliga a ponderar el perjuicio económico y comercial que la difusión de dicha información le podría ocasionar a la empresa que los presta.

Los Tribunales han reconocido que el acceso a la información pública es un derecho de configuración legal, pero no absoluto ni constituye un derecho fundamental, por lo que puede ser limitado de manera justificada cuando entre en conflicto con otros bienes jurídicos protegidos, entre los que se encuentran

los intereses económicos y comerciales de las organizaciones, entidades o empresas afectadas.

En relación con lo anterior, no puede ser exigible que Renfe Viajeros recabe y facilite información como la solicitada, en cuanto este trabajo y su publicación redundaría en injustificado perjuicio de los intereses comerciales de dicha mercantil. Esta conclusión tiene apoyo en la doctrina sentada por las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por ejemplo, la Resolución R/0039/2016, de fecha 14 de abril de 2016, la Resolución R/0239/2018, de 1 de septiembre de 2016, la R/0042/2018, de 23 de abril de 2018 y la R/0219/2018, de 10 de julio de 2018.

Partiendo de las referidas resoluciones y de lo señalado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su Criterio Interpretativo 1/2019, la aplicación del límite al derecho de acceso previsto en el artículo 14.1 h) de la ley **de Transparencia precisa la realización de un ‘test del daño’**, mediante el que se valore el perjuicio que produciría la difusión de la información requerida, y que **su resultado se pondere con el del denominado ‘test del interés público’**, cuyo objeto es valorar si en el caso concreto concurre un interés público o privado, específico y superior al interés empresarial, que pueda justificar el acceso.

En relación con el test del daño, atendiendo a la naturaleza de la información solicitada, el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha puesto de manifiesto que la Administración no tiene obligación de publicar aquella información que pueda perjudicar los intereses económicos y comerciales de las empresas que dependen de ella. En concreto, dicho organismo considera que, si se hiciese pública información sobre eventuales incidencias, como cancelaciones o retrasos en los servicios ferroviarios, la mayoría ocasionadas por causas ajenas a la empresa que los presta, se crearía una percepción en el público que afectaría de manera significativa e injustificada a sus intereses económicos y comerciales, por lo que dicha información debe ser considerada y tratada como un secreto empresarial.

En este entorno, facilitar información detallada sobre la dificultad de la explotación de este negocio, imputable, en muchos casos, a causas ajenas al operador, como el estado de las infraestructuras, instalaciones o a determinadas actuaciones de terceros, podría perjudicar a Renfe Viajeros, dejándola en posición injustificadamente desventajosa respecto a otros modos

de transporte, con el añadido de que si se trata de información que puede ser interpretada como significativa de deterioro de alguna faceta de la explotación, también puede tener un efecto de injustificado descrédito.

Ello supondría, además, una desventaja competitiva injustificada para Renfe Viajeros respecto del resto de operadores de transporte con los que compite, los cuales no vienen obligados a facilitar información como la solicitada. No debe olvidarse que Renfe Viajeros compite en el mercado desde un plano estrictamente privado, debiendo respetarse en todo caso las condiciones de competencia en la prestación de servicios de transporte ferroviario, de acuerdo con lo establecido en la normativa sectorial, comunitaria y nacional, con respeto a los principios de objetividad, transparencia y no discriminación.

Adicionalmente, cabe advertir que en el presente caso no concurre ningún motivo o razón, de naturaleza pública o privada, que permita concluir que la solicitud de acceso planteada deba prevalecer sobre la protección de los intereses económicos y comerciales de Renfe Viajeros (test del interés público). Y es que existen estadísticas e información sobre puntualidad y fiabilidad de la red y del servicio, que satisfacen sobradamente el interés público y privado.

En consecuencia, el resultado que ofrecen en el presente caso el test del daño y el test del interés público pone de manifiesto que únicamente proceder conceder acceso parcial a la información solicitada, siendo de aplicación el límite al derecho de acceso contemplado en el artículo 14.h) de la ley de Transparencia.

5º.- En conclusión, de acuerdo con lo que antecede y a la vista de la doctrina sentada por el CTBG, en el presente caso existen motivos suficientes para acordar la admisión parcial de la solicitud planteada, no siendo procedente facilitar información adicional la proporcionada en este escrito, al no tener la misma por objeto el acceso a información pública, en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, resultando también de aplicación el límite de acceso contemplado en el artículo 14.h).

Sin perjuicio lo expuesto, no existe inconveniente en informar, de forma graciable, que las circulaciones comerciales son 75 trenes en la C1 y 75 trenes en la C10 todos los días. Asimismo, sobre las tasas de puntualidad en los últimos 6 meses, se aporta el siguiente cuadro indicativo:

	AÑO 2022				AÑO 2023	
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
C1	98,13 %	97,29%	96,77%	96,61%	98,02%	96,81%
C10	97,16 %	97,06%	95,56%	95,18%	95,33%	95,93%

6º.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente Resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente.

Madrid, en fecha de la firma electrónica.

El Gerente de Área de Relaciones Institucionales de RENFE-Operadora E.P.E.

D. Sergio Bueno Illescas

En virtud de Resolución de 12 de enero de 2023, de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora, E.P.E., sobre delegación de competencias, publicada en el Boletín Oficial del Estado n.º 21 de 25 de enero de 2023.